

## Juntos Podemos

Otro extravío de la rendición de cuentas en la madeja de intereses público privados

Miguel Pulido  
Critical Thinking Advocates

Desde una perspectiva de rendición de cuentas, la iniciativa Juntos Podemos, llama la atención por diversas razones.

Comencemos por aclarar que navega en territorio pantanoso. Se inscribe en una tendencia de trasladar recursos públicos al ámbito privado, en operaciones que hacen del gobierno un simple financista de proyectos personales. Esto no sólo duplica las funciones de instituciones gubernamentales, coincide con un fenómeno de desfinanciamiento de lo público. El gobierno le da menos dinero a las instituciones de gobierno y más dinero a las privadas.

Así, bajo el pretexto de apoyar buenas causas, las personas involucradas puedan gastar (directa o indirectamente) millonarias sumas de dinero público con reglas laxas y sin fiscalización. Como es de suponer, esta tendencia no pone los recursos a disposición de cualquiera, son sólo para el círculo cercano de los políticos. Pero, si el origen del dinero es público ¿no deberían informar en detalle sobre el destino de los recursos? Más importante ¿no deberían estas personas estar sujetas a las responsabilidades administrativas y legales que rigen el gasto público?

La segunda razón es el tipo de estructura legal y financiera que usa Juntos Podemos para recibir los fondos. Hoy sabemos, por las explicaciones de Vázquez Mota en respuesta a la investigación de MCCI, que la instancia que públicamente se presenta como coordinadora de la iniciativa en realidad es sólo un membrete, pues no tiene la capacidad legal y administrativa para recibir los donativos. Otras instituciones los reciben. ¿Qué implica esto para el rompecabezas de la rendición de cuentas? Que las piezas están revueltas e incompletas. Y ese desastre no parece ser por accidente.

Financiar actividades privadas con fondos públicos es una acción excepcional que tendría que pasar serios filtros de justificación, tanto política como administrativa. No es el caso. Tener claridad respecto de los responsables tanto legales como en terreno por la ejecución de los fondos es indispensable para la rendición de cuentas. Tampoco es el caso. Para decirlo en una nuez: Juntos Podemos emplea un esquema parecido al de un testaferro o prestanombres. La información contable y legal refiere a instituciones constituidas legalmente pero escondidas públicamente mientras el usufructo (material y político) de la iniciativa apunta a Vázquez Mota.

Vayamos ahora a la información concreta que Juntos Podemos y las fundaciones que emplea la iniciativa para operar los recursos han hecho pública.

Desde la perspectiva informativa, los datos compartidos son insustanciales y no dan cuenta de la pertinencia de las acciones, tampoco de la eficiencia del gasto ni de los resultados logrados. Es decir, la información que ofrecen no sirve para rendir cuentas. ¿Por qué? Aquí algunos ejemplos, la página ofrece listados de organizaciones que recibieron apoyos sin mayor detalle. No sabemos si todas son del mismo tamaño, qué tipo de apoyo recibieron, si sirvió el apoyo o no (una cosa es recibir apoyo y otra que sirva), si recibieron un dólar, un millón o sólo un discurso.

Juntos Podemos presenta cifras sin contexto. Dicen, por ejemplo, que dieron “x” número de becas. Pero ¿cuánto cuesta cada una? ¿Qué duración tuvieron? Más concretamente ¿en qué consisten las 25 becas de formación y liderazgo que dieron a jóvenes más allá del viaje de 21 días que describen? ¿Cuántos millones de dólares de los recibidos se justifican con eso? Esos datos salpicados por aquí y por allá, no son útiles ni siquiera para entender qué hace concretamente la iniciativa Juntos Podemos. Mucho menos para tenerlos como un ejercicio serio de rendición de cuentas sobre el destino de nuestros impuestos.

Segundo problema, la iniciativa opera en amplios márgenes de discrecionalidad y no hay información que justifique cómo se tomaron las decisiones. Una cosa debe quedar clara: Juntos Podemos está involucrada en -y es la cara pública de- una iniciativa que transfiere recursos públicos a organizaciones y personas. La información que ofrece la iniciativa señala de manera general los procesos en función de los cuales se asignarán los fondos. Menciona que hay criterios y los enlista. Pero la información sustancial desde una perspectiva de rendición de cuentas es la ausente ¿quién y bajo qué procedimientos aplica estos criterios? ¿Cómo los aplicó de forma concreta? Sintetizar el vacío de rendición de cuentas de Juntos Podemos, a partir de la información divulgable en su página, es muy fácil: mencionan que existen dos tipos de evaluaciones pero ninguna de ellas está disponible. Las evaluaciones son sólo un encabezado en su página.

El tercer problema es que la información administrativa disponible (la que da cuenta de cómo presupuestan y gastan) debe activar las alarmas. Tomo como referencia la información de la AEM USA Foundation and Parents Alliance Inc. con la que se pretende informar el destino de **\$23.7 millones de dólares** en 2015. Primero, las categorías son tan ambiguas que prácticamente lucen diseñadas para gastar en cualquier cosa. La información provista apenas alcanza para conocer el nombre del proyecto y las actividades que querían realizar. En la evaluación del gasto y fiscalización de fondos sabemos que las categorías agregadas son la mejor forma de esconder desvíos. En esto caso si los hay, no lo sabemos.

Por otra parte, los montos son desproporcionales: el diseño de un programa de atención directa a población no puede tener gastos administrativos tan altos. Según la información de AEM USA Foundation and Parents Alliance Inc. poco más del 35% del total de los 23.7 millones fueron a dar a costear una estructura burocrática y a gastos operativos. Dos rubros retratan este despropósito: 10% del presupuesto está designado a desarrollar métricas de evaluación y seguimiento (documentos por cierto

NO disponibles públicamente) y prácticamente 1.9 millones dólares van a nómina. Según la propia información de Juntos Podemos, tienen una plantilla de 15 personas. Si les concedemos validez a sus propios datos, un estimado de servilleta nos dice que cada persona cuesta aproximadamente 120,000 dólares al año. Conozco muchas organizaciones que son altamente profesionales, tienen mucho más personal, un ámbito de cobertura mayor y que ejercen menor presupuesto.

Los problemas de Juntos Podemos en síntesis son: ejecutan un modelo que es altamente cuestionable desde su diseño; no dan cuenta de manera adecuada y atendiendo a lo delicado del origen de sus recursos de su quehacer, de la eficiencia y razonabilidad de sus gastos ni de sus resultados; y la poca información que comparten, nos confirma que al menos un aparte de los recursos públicos que reciben no son administrados de manera adecuada.